



Resolución 15/2021, de 26 de febrero, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León

Asunto: expediente CT-22/2020 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en calidad de Vocal de la Junta Vecinal de Vanidodes (término municipal de Magaz de Cepeda, León), ante esta Entidad Local Menor

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 16 de diciembre de 2019, D. XXX, presentó en el Registro de la Diputación de León una solicitud de información pública dirigida a la Junta Vecinal de Vanidodes (término municipal de Magaz de Cepeda, León), en su condición de Vocal de esta. El objeto de esta solicitud se formuló en los siguientes términos:

“Que se le facilite y ponga a disposición el expediente incoado al efecto por la Junta Vecinal que culminó con el abono de 2.999,76 euros y que viene numerado con el 8/11 con el concepto de Sentencia Judicial en las cuentas de 2018 que se me facilitaron en fecha reciente”.

Segundo.- Con fecha 14 de enero de 2020, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, en su condición de Vocal de la Junta Vecinal de Vanidodes, frente a la falta de acceso a la información pública indicada en el expositivo anterior.

Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos a la Junta Vecinal de Vanidodes poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. Con fecha 21 de febrero de 2020, se recibió la contestación de la Junta Vecinal de Vanidodes a nuestra solicitud de informe, señalándose en esta lo siguiente:

“Toda la documentación ya ha sido entregada por correo certificado a XXX el día 22 01 2020. Enviamos fotocopia del certificado de correos”.



Cuarto.- A la vista de la anterior respuesta de la Junta Vecinal de Vanidodes, con fecha 19 de marzo de 2020 esta Comisión de Transparencia abrió un trámite de alegaciones con el fin de que D. XXX alegara lo que tuviera conveniente respecto a si había accedido o no a toda la información pública cuya ausencia de acceso inicial había motivado su reclamación.

Como respuesta a dicho requerimiento, D. XXX, a través de un escrito registrado en esta Comisión de Transparencia el 23 de marzo de 2020, puso de manifiesto en relación con esta petición concreta lo siguiente:

“(...) ya he puesto en conocimiento de la Fiscalía el expediente que culminó con el abono de 2.999,76 euros y que viene numerado con el 8/11 con el concepto de Sentencia Judicial en las cuentas de 2018.

Sobre este asunto únicamente se me ha facilitado una respuesta parcial y en ningún caso el expediente administrativo requerido. En concreto, se me facilitó un certificado de una abogada, la Señora XXX, en la que se reconoce que los gastos provienen del Procedimiento Abreviado N.º 171/2018, ventilado ante el Juzgado de lo Penal N.º 2 de León, por un delito de lesiones frente a D. XXX y D.ª XXX por unos hechos producidos por su defendido, D. XXX, el entonces Presidente de la Junta Vecinal y su función de Presidente de la Junta Vecinal, como si entre las funciones del Presidente de una Junta Vecinal estuviera la de agredir a alguien o como si entre los gastos que debe soportar una Junta Vecinal estuvieran los gastos de procedimientos personales.

Sigo por tanto a la espera del Expediente, a pesar de que estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, dada la gravedad de los mismos”.

El “certificado” proporcionado por la Junta Vecinal de Vanidodes al solicitante, cuya copia ha sido remitida a esta Comisión por este último, fue emitido, con fecha 17 de diciembre de 2019, por una Letrada a petición de D. XXX. En este documento se señala que la autora del certificado ha defendido, en turno de oficio, a D. XXX en procedimiento abreviado seguido por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de León, por un delito de lesiones causadas a dos personas, “hechos producidos en su función de Presidente de la Junta Vecinal del Pueblo”. Se añade que en el citado procedimiento el antes identificado fue condenado a la pena de multa de 900 euros y al pago de indemnizaciones por importe de 2.097,96 euros, así como que “todas las anteriores cantidades ya han sido satisfechas por D. XXX en su función de Presidente de la Junta Vecinal del Pueblo, por lo que el procedimiento ha sido archivado”.



II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

El artículo 24 de la misma norma dispone que, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.

En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.

En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada.



Tercero.- La reclamación ha sido presentada por D. XXX, en calidad de Vocal de la Junta Vecinal de Vanidodes, quien se encuentra legitimado para ello puesto que fue quien, en la misma condición, presentó la solicitud de información pública que ha dado lugar a esta reclamación.

Cuarto.- Como cuestión previa al análisis de la actuación impugnada, es necesario analizar la competencia de esta Comisión de Transparencia para resolver la reclamación presentada, considerando que su autor ha actuado en la condición de Vocal de la Junta Vecinal de Vanidodes, y que el objeto de su impugnación es la falta de acceso a la información solicitada por este bajo el expreso amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante ROF).

Teniendo en consideración esa condición de Vocal del solicitante de la información pública, hay que tener en cuenta que, con carácter general, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRRL), establece el derecho de los concejales a obtener del Alcalde o Presidente de la Junta de Gobierno local, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Este precepto se desarrolla en los artículos 14, 15 y 16 del ROF. Conforme a los mismos, los concejales, y por identidad de razón los vocales de las Juntas Vecinales, tienen reconocido el derecho a obtener cuantos antecedentes, datos e informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resultan precisos para el desarrollo de su función, además de la información y documentación de la entidad local que sea de libre acceso para cualquier ciudadano.

Cualquier interpretación de las normas que articulan este derecho debe hacerse en sintonía con el bien jurídico protegido, en este caso preservar un derecho fundamental como es el reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española. Nos encontramos, por tanto, ante un régimen específico de acceso a la información pública por razón del sujeto solicitante (cargo representativo local) anterior a la aprobación de la LTAIBG, regulador de un derecho a la información reforzado debido a su vinculación directa con un derecho fundamental como es el de participación y representación política postulado en el citado artículo 23 de la Constitución Española.

Esta relación del acceso a la información de los cargos representativos locales con su derecho a la participación política ha conducido al Tribunal Supremo a señalar que, en ningún caso, los representantes políticos electos pueden tener reconocidas unas garantías inferiores a las de cualquier ciudadano en su ejercicio del derecho de acceso a la información. Así, en su Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de junio de 2015, relativa al acceso a información de los diputados de la Asamblea



Legislativa de la Comunidad Valenciana, pero trasladable igualmente a los cargos representativos locales, se señalaba lo siguiente:

“Ya al margen de las circunstancias propias de este litigio y como consideración de futuro, hay que decir que, tras la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y para la Comunidad Valenciana, tras la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunidad Valenciana, el derecho de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos públicos no solo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible” (fundamento jurídico séptimo, último párrafo).

Por tanto, el derecho de acceso a la información de los concejales y vocales de juntas vecinales es un derecho constitucionalmente privilegiado respecto al mismo derecho del que son titulares el resto de ciudadanos, compadeciéndose mal con este carácter reforzado el hecho de que se pudiera privar a los cargos locales de la posibilidad de utilizar el mecanismo de garantía consistente en la interposición de la reclamación ante las autoridades de garantía de la transparencia (CTBG u órganos autonómicos análogos allí donde se hayan creado).

En este sentido, la propia LTAIBG permite que también los cargos representativos locales, a pesar de contar con un régimen jurídico específico de acceso a la información, puedan utilizar este concreto mecanismo de garantía a través de la aplicación supletoria de aquella. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG, *“se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”*. Puesto que ni la LRBRLL ni el ROF prevén un mecanismo específico de garantía distinto del recurso judicial ante una autoridad independiente análogo a la reclamación regulada en el citado artículo 24 de la LTAIBG, esta aplicación supletoria permite cohonestar la aplicación del régimen específico del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los cargos representativos locales con su carácter privilegiado que impide que cuenten con menos garantías que las reconocidas a todos los ciudadanos en el ejercicio del mismo derecho, sin necesidad de que, para poder utilizar aquel mecanismo, deban ejercer este derecho como ciudadanos y despojarse para ello de su condición de representantes políticos electos. De esta forma, se superaría la incoherencia que puede suponer concluir que una normativa especial, que desarrolla un derecho fundamental, impide a sus

titulares utilizar una garantía de la que disponen todos los ciudadanos en aplicación de la normativa general de transparencia.

Como venimos señalando repetidamente, mediante la adopción de este criterio, plasmada por primera vez en la Resolución 86/2019, de 29 de abril (expediente CT-0314/2018), esta Comisión de Transparencia se sumó a la postura de otros organismos de garantía de la transparencia consistente en admitir su competencia para tramitar y resolver estas reclamaciones (entre otros, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña -GAIP-, desde su Resolución de 11 de febrero de 2016; el Consejo de Transparencia de Aragón, desde su Resolución 6/2017, de 27 de marzo; el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, entre otras en su Resolución 26/2017, de 10 de marzo; el Comisionado de Transparencia de Canarias, entre otras, en su Resolución 61/2016, de 31 de marzo; o, en fin, la Comisión de Transparencia de Galicia, en su Resolución 25/2016, de 15 de diciembre).

La postura adoptada por la GAIP fue confirmada judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su Sentencia núm. 1074/2019, de 18 de diciembre.

Quinto.- A la vista de la respuesta remitida a esta Comisión por la Junta Vecinal de Vanidoles y de las alegaciones realizadas por el reclamante respecto al contenido de esta, se puede concluir que la solicitud de información pública presentada por el ahora reclamante, en su condición de Vocal de la citada Junta Vecinal, no había sido resuelta expresamente en el momento de formular su reclamación, al margen de la contestación proporcionada con posterioridad a través del correo postal remitido el 22 de enero de 2020 al solicitante, y que, en todo caso, tampoco dio lugar a que se pusiera a disposición de este una copia del expediente por él pedido.

En definitiva, la solicitud de información ha sido estimada presuntamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del ROF al que se hará referencia en el siguiente Fundamento de Derecho, puesto que, en ningún caso, ni siquiera durante la tramitación de este expediente de reclamación, la Junta Vecinal ha denegado expresamente dicha solicitud. Por lo expuesto, en este caso el objeto de la reclamación ha sido una resolución presunta cuyo contenido es el reconocimiento del derecho de D. XXX a acceder a la información realmente solicitada por el mismo. Con carácter general, en aquellos supuestos en los que el interesado ha obtenido por silencio administrativo el reconocimiento de una prestación pública, algo que materialmente debe producir o entregar la Administración, el acto presunto, desde un punto de vista práctico, puede adolecer de falta de virtualidad o de efectividad, puesto que a pesar de que se haya producido el silencio positivo, la persona solicitante sigue sin ver satisfecho el objeto de su solicitud (en este caso, la obtención del acceso a la información pedida).

En este sentido y siguiendo lo afirmado al respecto en el Criterio Interpretativo



de la GAIP, de 7 de enero de 2016, sobre reclamación en caso de silencio administrativo, la previsión del legislador de crear organismos de garantía en materia de acceso a la información pública que se ofrecen como alternativa a la vía jurisdiccional, es significativa de la voluntad de facilitar a todos los ciudadanos la tutela y garantía del derecho de acceso a la información, en todos aquellos casos en los que este no se vea satisfecho, bien por verse desestimado el mismo expresa o presuntamente al margen de lo dispuesto en la normativa aplicable; bien por no verse materializado efectivamente mediante el acceso solicitado como consecuencia de una mala praxis de la Administración al no cumplir con su obligación de resolver, cuando el silencio sea positivo.

En consecuencia, puesto que los artículos 24 de la LTAIBG y 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, reconocen expresamente la posibilidad de interponer ante esta Comisión de Transparencia reclamaciones frente a resoluciones presuntas en materia de acceso a la información pública, resulta coherente con la letra y con el espíritu de estas leyes que, dentro de estas reclamaciones presuntas impugnables, se incluyan también las estimatorias. Lo contrario implicaría que en estos casos se “beneficiara” la actuación incorrecta de la Administración consistente en no resolver lo procedente en el plazo establecido para ello, con la frustración del legítimo derecho de los ciudadanos a solicitar la tutela de este órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública.

En cuanto al plazo para interponer reclamaciones frente a resoluciones presuntas, este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. No obstante, con carácter general, respecto al plazo para reclamar frente a las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a la información pública, se debe poner de manifiesto el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición, se concluye lo siguiente:

“... la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”.

Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que tampoco se encuentran sujetas a plazo las reclamaciones que se presenten ante las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública que no se hayan materializado.

Sexto.- Comenzando con el análisis material de la reclamación que ahora nos ocupa, debemos partir de la definición que se contiene en el artículo 13 de la LTAIBG



de la información pública como *“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*.

En este caso, la solicitud de información se encuentra referida a un expediente administrativo tramitado con motivo de un gasto realizado por la Entidad Local Menor que ascendió a 2.999,76 euros. Es evidente que lo que ha sido proporcionado en este caso por la Junta Vecinal al reclamante no se corresponde con lo solicitado, puesto que el documento firmado por una Letrada referido en el antecedente cuarto de los antecedentes lo que acredita, en el mejor de los casos, es que el gasto señalado se corresponde con la condena e indemnización fijada en una Sentencia adoptada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de León por la que el Alcalde Pedáneo fue condenado por un delito de lesiones (hay una pequeña diferencia de dos euros entre el gasto realizado por la Junta Vecinal y la cantidad abonada en concepto de multa e indemnizaciones), pero nada aporta respecto al hecho de que haya sido la Junta Vecinal, con cargo a sus presupuestos, la que haya procedido al pago de esas cantidades. Este abono, con cargo al presupuesto público, debiera tener un sustento jurídico-documental sobre el que no se ha informado por parte de la Junta Vecinal.

En todo caso, la asunción de la competencia de esta Comisión de Transparencia, para resolver las reclamaciones presentadas por los miembros de las corporaciones locales en materia de derecho de acceso a la información en los términos que ya hemos indicado, no impide que el régimen jurídico que deba ser aplicado sea, en primer lugar, el previsto de forma específica en los artículos 77 de la LRBL y 14 a 16 del ROF. En líneas generales, el desarrollo reglamentario de este régimen recoge las siguientes previsiones:

1.- Las peticiones de acceso a la información se entenderán concedidas por silencio administrativo cuando no sean resueltas expresamente en el término de cinco días, a contar desde la fecha de la solicitud (artículo 14 del ROF).

2.- Los servicios administrativos están obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: a) Cuando se trate del acceso de los miembros que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas. b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. c) Cuando se trate del acceso a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos. (artículo 15 del ROF).



3.- La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se registrarán por las siguientes normas: a) Podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los documentos o de una copia de los mismos. El libramiento de copias se limitará a los casos de acceso libre de los Concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Junta de Gobierno (artículo 16.1 a) del ROF). b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de las dependencias y oficinas locales (artículo 16.1 b) del ROF). c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General (artículo 16.1 c) del ROF). d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria (artículo 16.1 d) del ROF).

4.- Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función (artículo 16.3 del ROF).

Por otro lado, tal y como se ha expuesto con anterioridad, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que los representantes locales no pueden disfrutar, en ningún caso, de menos garantías que un ciudadano en el momento de ejercer su derecho de acceso a la información, razón por la cual las normas generales expuestas deben coherenciarse ahora con la legislación de transparencia especialmente garantista, de forma tal que nunca aquel ejercicio sea más restrictivo para un miembro de una corporación local que para un ciudadano. Este principio tiene sus consecuencias en aspectos tales como la obtención de copias o la aplicación de los límites al acceso a la información. En todo caso, la regla general ha de ser favorable a permitir a los miembros de las corporaciones locales ejercitar su derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha recordado en sus Sentencias de 17 de abril y 21 de junio de 2018 lo siguiente:

“(...) en caso de duda, la decisión municipal debe ser siempre la de proporcionar un franco acceso a toda la documentación que obre en el consistorio, salvo supuestos excepcionales. Ni siquiera si la oposición realiza una «batería de solicitudes sucesivas» cabe denegar el acceso. El hecho de que no sea interesado en un procedimiento administrativo no impide tomar conocimiento del mismo a un miembro de la corporación municipal. Cabe preguntarse la situación pasiva; ¿en qué perjudica al alcalde y al equipo de gobierno que la oposición tenga acceso a determinados expedientes?; desde luego, no ha sido objeto de sugerencia ninguna circunstancia obstativa. Y finalmente, la afirmación de que tal acceso supone una carga adicional a los funcionarios no sólo debe ser acreditada, sino que perfectamente puede ser solventada permitiendo el acceso a los expedientes sin obtención de copias, por



ejemplo”.

En el supuesto ahora analizado el contenido de la información solicitada se debería encontrar integrado por la documentación que forme parte del expediente tramitado por la Junta Vecinal para proceder al pago de la cantidad identificada por el solicitante. El acceso a esta información no se ve afectado, en principio, por ninguno de los límites al derecho de acceso a la información pública recogidos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni concurre tampoco aquí ninguna de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública establecidas en el artículo 18 de la LTAIBG.

El derecho a acceder al documento o documentos solicitados se debe reconocer a cualquier ciudadano que así lo solicite y, por tanto, no existen objeciones a que un Vocal pueda obtener una copia de aquel o aquellos.

Finalmente, cabe señalar que en el caso de que el expediente no existiera, la Resolución de la solicitud de información debía de adoptarse igualmente declarando expresamente esta circunstancia. En efecto, como viene señalando esta Comisión de Transparencia en varias de sus Resoluciones (entre otras, Resolución 120/2020, de 5 de junio, expte. CT-145/2020; Resolución 155/2020, de 29 de julio, expte. CT-329/2019; o Resolución 212/2020, de 13 de noviembre, expte. CT-171/2020), la comunicación dirigida a un ciudadano en la que se indique que la información solicitada por este no existe o no se encuentra localizable, responde expresamente a la petición realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas al derecho de acceso a la información pública.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros,

RESUELVE

Primero.- Estimar la reclamación frente a la falta de acceso a una información pública solicitada por D. XXX, en calidad de Vocal de la Junta Vecinal de Vanidades (término municipal de Magaz de Cepeda, León), a esta Entidad Local Menor.

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Junta Vecinal de Vanidades debe **facilitar a D. XXX una copia del documento o documentos integrantes del expediente tramitado para proceder al pago de 2.999,96 euros**, en concepto de pago a que se ha hecho referencia, relacionado la Sentencia adoptada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de León en el Procedimiento Abreviado núm. 171/2018.



Si no existiera tal expediente, se debe adoptar una Resolución expresa en la cual se haga constar esta circunstancia.

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y a la Junta Vecinal de Vanidodes, ante la que se formuló la reclamación.

Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Esta Resolución es ejecutiva. Frente a la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Tomás Quintana López